In memoriam

Dr. Alán Arias Marín

Presentación

A finales de 2017 murió el doctor Alán Arias Marín uno de los investigadores más destacados del Centro Nacional de Derechos Humanos, del área de investigación de la CNDH. Miembro fundador del centro desde 2002, Alán Arias fue un académico con reconocimiento internacional. Investigador, catedrático, articulista, filósofo, director y conductor de programas radiofónicos, asesor político y funcionario público son solamente algunas de las facetas que desempeñó en su prolífica carrera. Su carácter multifacético comenzó desde su formación, comenzando por la Licenciatura en Filosofía (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM). A esta etapa universitaria, plena de compromiso y actividad política, siguieron los estudios en la Maestría en Ciencia Política cursados en la *New School for Social Research* de Nueva York. Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Unión Europea en 2009 en su proceso de especialización temática. Finalmente, obtuvo el Doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el 2015 en España.

Alán Arias se constituyó como el decano de la investigación en el CENADEH. Su solidaridad, compañerismo y generosidad estuvieron siempre acompañados por un agudo sentido crítico, enorme capacidad teórica y un fino sentido del humor. Su irreverencia ante el conformismo académico y los rituales institucionales lo convirtieron en referencia obligada: un faro para encauzar la ponderación, la medida y la autocrítica. El CENADEH ha decidido rendir un modesto tributo a la gran figura del doctor Alán Arias dedicándole a su memoria los números de *Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos* del 2018. Sus compañeros de trabajo no lo olvidaremos nunca.

Los derechos humanos son, en virtud de su propia naturaleza, paradójicos en ejes y campos distintos. Paradoja, en este sentido, se refiere a la confrontación de opiniones dominantes u ortodoxas y desafiantes o heterodoxas, que debe derivar en una lectura alternativa, realista y más eficaz de los derechos humanos. Para Jonathan Alejandro Correa Ortiz, la paradoja central de los derechos humanos es la que ocurre entre su carácter utópico y su dimensión pragmática. Esta confrontación encuentra su mayor peligro en el populismo contemporáneo; su manifestación más evidente es la xenofobia que sustenta la limitación de los derechos humanos “por razones de seguridad” en buena parte del orbe. Correa Ortiz emprende el análisis de una tríada paradójica fundamental: la teórica, la discursiva y la movilizacional, que aborda mediante sus momentos centrales de tensión entre discurso y práctica. El propósito del ejercicio es, amén de fortalecer su significado político, rescatar el espíritu utópico de los derechos humanos mediante el abandono de su empleo retórico, lo cual

permitiría reivindicar su potencial de emancipación y una posible teoría que pueda enfrentar los retos que se vislumbran para el Siglo XXI.

El primer centro analítico es la aparente contradicción entre la “marcha triunfal” de los derechos humanos, cada vez más reconocidos en el plano jurídico e invocados frecuentemente con propósitos políticos, pero bajo el asedio de sus paradojas. Partiendo de las propuestas de Costas, se identifica una tensión inherente entre este discurso y las limitaciones pragmáticas de las políticas de derechos humanos, una suerte de narrativa ideológica de la globalización tras el llamado “fin de la historia”. Correa Ortiz, siguiendo la línea argumentativa de Alán Arias, propone que la manera de reintegrar discurso y práctica es regresando a la víctima al centro de la discusión y atención de los derechos humanos. En este tenor, propone que la disrupción del sistema contemporáneo de los derechos humanos por los populismos y otras manifestaciones nacionalistas es apenas el comienzo del embate contra un orden global que necesita una nueva legitimación teórico-práctica para consolidarse. Para México, el desafío de la violencia obliga al proceso del empoderamiento de la víctima como instrumento para reivindicar los derechos humanos como eje de la movilización social.

José Luis Gabriel Contreras Aguirre nos presenta una visión acerca de la situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, específicamente sus derechos políticos. Partiendo de la base de que diversas causales políticas, históricas, sociales e incluso culturales, han llevado al Estado a la suspensión de garantías constitucionales de naturaleza civil y política, propone revisar estos actos. Tomando en consideración los principios tanto de los derechos humanos como procesales de presunción de inocencia, igualdad y no discriminación, considera que hay necesidad de actualizar el marco normativo. En la actualidad diversas reformas han fortalecido del tratamiento de las personas privadas de la libertad. Entre ellas menciona las transformaciones en materia de justicia penal adversarial, así como la reforma constitucional en derechos humanos de 2011. Existe un nuevo derrotero literal a constituir un paradigma literal del interno a su reinserción social; es fundamental aplicar el control de convencionalidad para poner al día el marco referido. Las personas privadas de la libertad deben ser consideradas un grupo poblacional en condiciones de vulnerabilidad, por lo que Contreras reivindica la necesidad de garantizar su inserción democrática. Para el autor, es evidente que existe una contraposición en diversos artículos que se refieren al trato de las personas privadas de su libertad. Postula la necesidad de revisar el artículo 38 constitucional a la luz de los principios de los derechos humanos mencionados, apoyándose en diversos tratados ratificados por nuestra nación. De esta manera, Contreras puntualiza que sólo mediante esta reforma será posible tratar a este grupo vulnerable de la manera prevista en el actual marco de protección de los derechos humanos.

Patricia Lizeth Merino Hernández se enfoca al fenómeno del voto nulo dentro del sistema electoral mexicano, proponiendo fortalecer su carácter como manifestación ciudadana. Para hacerlo, utiliza tanto el derecho como la economía, un acercamiento disciplinario que reivindica esta manifestación como un auténtico ejercicio de los derechos democráticos. La combinación de ambas disciplinas lleva a la autora a considerar que le emisión de una boleta o voto en blanco, nulo, ó invalidado de manera propositiva por el votante, debe ser reconsiderada en varios planos. Considerando que se trata de un ejercicio consciente realizado

por un elector con plenos derechos civiles y políticos, debemos abandonar el modelo actual, que simplemente los recuenta, minimiza estadísticamente y termina por desechar su importancia y significado. Merino propone que el voto en blanco incida directamente en el cálculo de las aportaciones que reciben los agentes electorales (principalmente los partidos políticos). Es decir, que el financiamiento público se base en la votación válida emitida, a la cual se le debe restar la proporción correspondiente de votos nulos o en blanco. En pocas palabras, se trata de dar al voto nulo o blanco un carácter más significativo; manifestación política de rechazo, inconformidad o por cualquier otra causa. La conducta política de estos agentes electorales se vería transformada por la necesidad de atender las causas que motivan este tipo de votación como manifestación de inconformidad democrática. Al establecer una ruta paralela entre el acercamiento jurídico y el económico, la autora propone una forma sustantiva en la cual este tipo de votación incida directamente en los agentes electorales.

Braulio Ramírez Reynoso aborda uno de los problemas más acuciantes para el cumplimiento de la agenda y políticas públicas inherentes a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011: un presupuesto adecuado, con perspectiva transversal que permita sostenerla y consolidarla. Derechos humanos y presupuesto público es el tema del análisis, configurando su campo de acción a partir del Plan Nacional de Desarrollo y distintos programas sectoriales. El autor identifica de inmediato la contradicción fundamental que existe en este tema. Por un lado, el Presupuesto de Egresos se basa en el cumplimiento de metas e índices macroeconómicos determinados de manera técnica y política. Por el otro, diversos artículos constitucionales, particularmente aquellos modificados en el 2011, mandatan el aseguramiento y consolidación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales cuyo costo resulta muy elevado. Con base en diversas iniciativas de la CNDH, UNAM y otras instituciones, Ramírez propone una serie de modificaciones puntuales a diversos ordenamientos jurídicos que podrían permitir agilizar el proceso de transversalización dentro del presupuesto público. Esto permitiría proyectar las políticas públicas de derechos humanos con una base presupuestaria adecuada, fortaleciendo las capacidades para consolidar nuestra ambiciosa agenda constitucional.

Liliana Aquino Dehesa se propone analizar las precarias condiciones laborales como violación al derecho al trabajo en el caso de los jornaleros agrícolas de San Quintín. Con base en la revisión y análisis de la Recomendación 2/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se estudia la situación de los trabajadores que se encuentran en condiciones de precariedad informalidad laboral. El objetivo del estudio es identificar el grado de vulnerabilidad social, generada por condiciones en las que se violan sus derechos laborales. Uno de los aspectos fundamentales de la recomendación que estudia Aquino es el de la identidad de los jornaleros agrícolas cuyos derechos laborales fueron vulnerados en el caso del valle de San Quintín del estado de Baja California. Se trata de trabajadores migrantes procedentes de estados con altos índices de marginación nacional: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Esta marginalidad de origen es uno de los factores fundamentales que los hayas llevado a desplazarse de manera temporal y cíclica hacia el norte del país. Las agroindustrias locales aprovechan esta vulnerabilidad inherente a los migrantes para establecer condiciones laborales que infringen el derecho al trabajo decente. El marco con-

temporáneo constitucional y de los instrumentos internacionales firmados por México afirma de manera contundente que estas condiciones resultan en violaciones sistemáticas. Aquino propone retomar las principales observaciones de la recomendación de la CNDH con el fin de asegurar el derecho a un trabajo decente.

La revista concluye con un extenso comentario bibliográfico de Moisés Jaime Bailón Corres a la obra *Justicias indígenas y Estado. Violencias contemporáneas*, editado por María Teresa, Rosalva Aída Hernández y Rachel Sieder (México, FLACSO/CIESAS, 2013). Resulta de importancia y actualidad por tratarse de uno de los primeros textos que analiza críticamente el devenir de las reformas constitucionales y legislativas en material indígena. La situación de los pueblos indígenas y sus sistemas de justicia contemporáneos, ha impactada profundamente por el proceso de violencia originada por las organizaciones delictivas.

Como hemos visto, este número 33 de *Derechos Humanos México* está constituido por textos diversos y eclécticos. Tal vez esta riqueza temática sea un pequeño, pero adecuado homenaje póstumo a la memoria de Alán Arias.

Claustro de investigadores del CENADEH